

GOBIERNOS Y SINDICATOS ANTE LA REFORMA DEL ESTADO DEL BIENESTAR. ¿RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL EN LA PERIFERIA DE LA EUROZONA?¹

GOVERNMENTS AND UNIONS IN THE REFORM OF THE WELFARE STATE. RUPTURE OF SOCIAL DIALOGUE IN THE PERIPHERY OF THE EUROZONE?

Sergio González Begega²

David Luque Balbona³

Ana M. Guillén⁴

Universidad de Oviedo

Fecha de recepción: 9 de marzo de 2015.

Fecha de aceptación en su versión final: 28 de julio de 2015.

Resumen

El artículo aborda las transformaciones del sistema de producción de políticas públicas en España, Italia, Irlanda y Portugal en el contexto de la crisis económica. Desde 2008, los países de la periferia del Euro han sido sometidos a intensas presiones financieras, que han reducido el margen de discrecionalidad de los actores nacionales en los procesos de determinación política. La toma de decisiones ha debido adaptarse a un nuevo escenario de condicionalidad expresa o implícita, según el caso. La reforma del Estado del Bienestar en los cuatro países se ha producido bajo la supervisión de las instituciones comunitarias y atendiendo al imperativo de priorizar el objetivo de consolidación fiscal. La condicionalidad europea ha dañado la funcionalidad de los pactos sociales como instrumento de elaboración de políticas públicas. La crisis de la periferia del Euro ha implicado la desactivación de las dinámicas corporatistas de diálogo social y ha introducido importantes cambios en los modelos de gobernanza socio-económica de estos países.

Palabras clave: *Gobiernos, sindicatos, diálogo social, gobernanza socio-económica, Estado del Bienestar.*

Abstract

The article tackles the transformations in the production of public policies in Spain, Italy, Ireland and Portugal within the context of the Great Recession. From 2008 onwards, the periphery of the Eurozone has been under strong financial strain, which has reduced the margin for discretion of national political actors. Public policy-making has had to be adapted to a new scenario of implicit or explicit conditionality, depending on the case. Welfare reform in the four member states has been performed under the supervision of European institutions and following the imperatives of fiscal consolidation. European conditionality has negatively impacted on social pacts as mechanisms for the determination of public policies. The financial and economic crisis in the periphery of the Euro has implied the de-activation of the corporatist dynamics of social dialogue and has introduced significant changes in the models of socio-economic governance of these countries.

Keywords: *Governments, trade unions, social dialogue, socio-economic governance, Welfare State.*

¹ Este trabajo forma parte del proyecto de investigación CABISE (Capitalismo del bienestar en el sur de Europa: un análisis comparado) financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (referencia: CSO2012-33976).

² Departamento de Sociología, Universidad de Oviedo. gonzalezsergio@uniovi.es

³ Departamento de Sociología, Universidad de Oviedo. luquedavid@uniovi.es

⁴ Departamento de Sociología, Universidad de Oviedo. aguillen@uniovi.es

INTRODUCCIÓN

La crisis financiera abierta en 2008 ha sometido a una importante tensión a los sistemas de gobernanza socioeconómica de los países de la periferia de la Eurozona. Como en otros socios europeos, España, Irlanda, Italia y Portugal han definido sus modelos de elaboración de políticas públicas incorporando a los actores representativos de la sociedad civil a la toma de decisiones en materia de bienestar, pero también de política de rentas o de mercado de trabajo. La secuencia de reformas que facilita la transformación de las estructuras de regulación industrial-fordistas desde la década de los ochenta descansa sobre la corresponsabilidad de sindicatos y asociaciones empresariales en la gobernanza socioeconómica (Hamann y Kelly, 2011).

La irrupción de la crisis, sin embargo, ha provocado una deriva generalizada del consenso a la unilateralidad gubernamental en la periferia de la Eurozona. Las dinámicas neo-corporatistas que orientaron al consenso a gobiernos, sindicatos y asociaciones empresariales en las últimas décadas se han visto interrumpidas en el periodo 2008-2014, abriendo interrogantes acerca del significado de esta discontinuación del diálogo social (González Begega y Luque Balbona, 2014).

El artículo aborda la reconfiguración del sistema de gobernanza socioeconómica en España, Irlanda, Italia y Portugal en el contexto de la crisis, desde una perspectiva comparada. Su objetivo es examinar la pérdida de centralidad del diálogo social como mecanismo de producción de políticas públicas, así como evaluar los desplazamientos actoriales asociados a esta transformación institucional. El análisis se centra en la interacción entre gobiernos y sindicatos en los cuatro países, aproximándose al papel motriz o reactivo de estos actores en las iniciativas de reforma del bienestar, pero también de otras áreas políticas anejas.

La crisis ha acelerado los procesos de reestructuración de los Estados del Bienestar europeos, abiertos en la década de los ochenta. La periferia de la Eurozona se ha visto sometida a intensas presiones de reforma, como resultado de la supervisión de las finanzas públicas por parte de las instituciones comunitarias (Petmesidou y Guillén, 2014). Algunos expertos han señalado que tras años de recalibrado y reforma contenida, la austeridad abre la puerta a una Era del Ajuste, sobre todo en aquellos países más afectados por los problemas de desequilibrio fiscal (Pierson, 2011).

Ahora bien, independientemente de la intensificación de estas presiones, la agenda de reformas sobre bienestar se ha visto acompañada de una transformación de los mecanismos de gobernanza socioeconómica. El impacto de la crisis no opera únicamente en el plano epidérmico del ajuste del gasto o sobre la racionalización del catálogo de servicios. La huella de la crisis es, además, de carácter institucional y afecta a la gobernanza socioeconómica: (1) implica la modificación de los dispositivos de toma de decisiones sobre bienestar como resultado de la reducción del espacio de soberanía nacional y de la reorientación estratégica de los actores; y (2) cuestiona la funcionalidad del diálogo social como instrumento de construcción de políticas públicas.

Con el fin de contrastar estos dos argumentos, el artículo examina la experiencia de diálogo social discontinuo y reforma unilateral en la periferia de la Eurozona, a lo largo del periodo 2008-2014. Para ello, se adapta la propuesta de marco conceptual-analítico de Obert *et al.* (2011) sobre condiciones de estabilidad del intercambio político neo-corporatista.

En primer lugar, se describe cómo la condicionalidad política asociada al acceso al soporte financiero europeo ha afectado a los requisitos básicos de activación del diálogo social: mandato, unidad, recursos y actitud de los actores. La interiorización de las exigencias de austeridad ha provocado la exclusión sistemática de los sindicatos del diseño de las medidas de ajuste y, consecuentemente, el retorno de una intensa conflictividad en la arena político-laboral.

En segundo lugar, se discute si estas transformaciones en el modelo de gobernanza socioeconómica alcanzan un rango estructural, como parece en Italia o en Irlanda, o son más bien coyunturales, como

en España y Portugal (Culpepper y Regan, 2014; González Begega y Luque Balbona, 2015). La pregunta es relevante, porque introduce una novedosa heterogeneidad institucional entre los cuatro países, que tradicionalmente han sido incluidos dentro de la misma variedad de neo-corporatismo **débil** o de baja densidad de coordinación (ver Rehfeldt, 2000; Avdagic, 2010; entre otros) y porque permite interpretar de forma históricamente incrustada la deriva de la formulación política en la periferia de la Eurozona desde la "negociación hacia la imposición" (Molina y Miguélez, 2013).

La estructura del artículo será la siguiente. Tras esta introducción, la segunda sección presenta el marco conceptual-analítico. Siguiendo a Öbert *et al.* (2011), se concibe el diálogo social como un intercambio político entre actores, cuya estabilidad responde a un conjunto de precondiciones dinámicas. La tercera sección describe las transformaciones en la relación gobiernos-sindicatos dentro del periodo 2008-2014, examinando el comportamiento de dichas precondiciones para los cuatro países y en relación a cada uno de estos actores. Por último, el apartado de conclusiones discute en qué medida las transformaciones del modelo de gobernanza socioeconómica en la periferia de la Eurozona deben ser interpretadas: (1) como coyunturales, y por tanto asociadas a los habituales ciclos de activación y discontinuación del diálogo social (Avdagic, 2010); o (2) como expresión de la ruptura del modelo neo-corporatista de toma de decisiones públicas, y advertencia de la consolidación de un nuevo paradigma de unilateralidad para la acción gubernamental.

DIÁLOGO SOCIAL, NEO-CORPORATISMO E INTERCAMBIO POLÍTICO

En su noción más genérica, el término neo-corporatismo hace referencia a un sistema de coordinación de geometría variable entre los intereses privados de la sociedad civil y el gobierno, en representación del Estado (Molina y Rhodes, 2002). Como señala Regini (2003: 251), el neo-corporatismo expresa "el profundo cambio de las funciones realizadas por las asociaciones de interés en la regulación de las economías avanzadas".

Bien sea como forma de intermediación de intereses (Schmitter, 1974) o como modo de formulación política (Lehmbruch, 1977), reflexionar sobre los procesos de diálogo social e, implícitamente, sobre las estructuras neo-corporatistas que los sustentan, significa también pensar en los modelos de gobernanza socioeconómica de las democracias de la Europa Occidental y en sus transformaciones.

El diálogo social visibiliza el andamiaje neo-corporatista como un intercambio político entre actores, a través del cual los grupos privados más representativos de la sociedad civil en el ámbito socio-económico, sindicatos y empresarios, son incorporados a la toma de decisiones públicas (Pizzorno, 1978). Öbert *et al.* (2011: 366) definen este intercambio "como un juego que tiene lugar en la arena institucional en el cual cada actor controla recursos que el otro desea" y que da lugar a un amplio catálogo de cálculos estratégicos. Pues si el gobierno controla la regulación, la fiscalidad y el gasto público, estos grupos privados también disponen de recursos deseables para el gobierno, como el control de sus afiliados.

En esta concepción, lo relevante no son los aspectos estructurales o de capacidad del intercambio para generar resultados en forma de pacto social sino el juego político en sí mismo. Es decir, entender cuándo y por qué los actores deciden implicarse en el canje de recursos: fundamentalmente legitimidad a cambio de reconocimiento institucional. El enfoque de intercambio político subraya el dinamismo estratégico de los actores y resalta su capacidad de adaptación al juego de recursos mutuamente deseados y efectivamente trocados en función de los condicionantes externos. La Figura 1 sintetiza el mapa de intereses cruzados sobre el que se sustenta el intercambio político neo-corporatista.

FIGURA 1. NEO-CORPORATISMO E INTERCAMBIO POLÍTICO

Fuente: adaptado de Öbert *et al.* (2011: 368).

La activación del intercambio político neo-corporatista está sujeta a un cierto número de precondiciones. La primera de ellas es (1) el mandato o capacidad efectiva de toma de decisiones autónomas de cada actor dentro de su esfera de interés. Para el gobierno, implica la exigencia de soberanía sobre la política nacional, desde una posición de mayoría parlamentaria no condicionada interna o externamente. Para sindicatos y empresarios, significa el cumplimiento de la función representativa de sus afiliados y la aceptación de las exigencias de la corresponsabilidad política.

La segunda precondición es (2) la unidad o capacidad para hacer efectivos los acuerdos alcanzados. El gobierno debe contar con un respaldo en escaños que le permita validar parlamentariamente el acuerdo. Por su parte, los agentes sociales también deben disponer de la suficiente cohesión interna como para asumir y hacer cumplir los compromisos adquiridos.

El tercer elemento es (3) la disponibilidad de recursos deseados por la contraparte: de reconocimiento como interlocutor en los procesos de toma de decisiones públicas y financiación, por parte del gobierno; de movilización de los intereses representados y legitimación vía soporte de opinión pública, en el caso de los agentes sociales. La literatura sobre neo-corporatismo ha probado que ambos actores se inclinan más hacia el diálogo social cuando se perciben en situaciones de debilidad relativa. Los gobiernos, cuando no disponen de una posición parlamentaria mayoritaria o ante la posibilidad de que una determinada batería de medidas afecte negativamente a sus expectativas electorales. Los grupos de intereses privados, cuando, debido a su posición de inferioridad, identifican la necesidad de reforzar su reconocimiento, legitimación y capacidad de representación dentro de su ámbito de interés.

Por último, (4) la actitud o predisposición hacia el intercambio político es relevante no solo en términos de activación del mismo sino también para garantizar su continuidad aún en escenarios adversos.

El siguiente apartado examina la estabilidad de las cuatro precondiciones anteriores para cada uno de los países de la periferia de la Eurozona, incorporados a la comparación. En primer lugar, se evalúan las transformaciones de mandato, unidad, recursos y actitud hacia el intercambio político por parte de los gobiernos a lo largo del periodo 2008-2014. A continuación, se replica el ejercicio con las organizaciones sindicales.

GOBIERNOS Y SINDICATOS ANTE EL DIÁLOGO SOCIAL: MANDATO, UNIDAD, RECURSOS Y ACTITUDES

Diálogo social en la periferia de la Eurozona: ¿Una comparación forzada?

Toda selección de casos nacionales que tenga como objetivo efectuar una comparación política o, como es el caso, de modelos de gobernanza socioeconómica, plantea dificultades cuando la muestra ofrece discontinuidades de carácter institucional. España, Italia, Irlanda y Portugal muestran algunas anomalías de trayectoria histórica, funcionalidad y estabilidad del diálogo social que han dificultado su inclusión en las categorías clásicas de modelos neo-corporatistas (Avdagic, 2010).

Más aún, además de la especificidad de los modelos de diálogo social de los cuatro países, uno de ellos, Irlanda, se aleja del modelo de gobernanza socioeconómica que comparten los otros tres. Mientras que España, Italia y Portugal han sido definidos dentro de la literatura sobre variedades de capitalismo como Economías Mixtas de Mercado, una suerte de construcción híbrida, de perfiles más difusos y menos estables que los descritos tanto para las Economías de Mercado Coordinadas como para las Liberales, Irlanda se adscribe precisamente a estas últimas (Hall y Soskice, 2001).

Tampoco es posible, y por motivos similares, abordar la comparación atendiendo a los regímenes de bienestar a los que corresponden los cuatro países. España, Italia y Portugal se adscriben a uno de ellos, el Mediterráneo, que aún sometido a intensas presiones de fragmentación interna, constituye todavía un modelo reconocible (Ferrera, 1996; Petmesidou y Guillén, 2014). Irlanda ofrece, nuevamente, la nota discordante, al adscribirse a la variedad de bienestar liberal (Esping-Andersen, 1993).

Frente a estos problemas de diversidad institucional, emergen ciertos aspectos actoriales, que resultan relevantes para entender el papel jugado por el diálogo social dentro del sistema de gobernanza socioeconómica, y que permiten la comparación. Aunque bajo diferentes trayectorias históricas, el diálogo social ha sido, en los cuatro países, el resultado de una serie de opciones estratégicas tomadas por los actores nacionales, con el fin de hacer frente a las presiones competitivas de la globalización y de la europeización.

En España, Italia, Irlanda y Portugal, la consolidación de los pactos sociales neo-corporatistas como instrumentos para la formulación de políticas públicas corre en paralelo a la necesidad de acometer un amplio programa de reformas en materia de rentas, mercado de trabajo y bienestar. La integración europea y, muy especialmente, el proyecto de Unión Económica y Monetaria (UEM), sirvió de catalizador externo para el resurgimiento del corporatismo en la periferia europea a comienzos de la década de los noventa (Rhodes, 1998).

Este neo-corporatismo pre-Euro abandonó los objetivos redistributivos del viejo corporatismo fordista y adoptó un carácter competitivo y de control, pasando a ser concebida "como un instrumento de ajuste al nuevo entorno económico [globalizado], antes que como un instrumento de política económica" (Hassel, 2003: 707). La nueva orientación del diálogo social resultó especialmente útil en aquellos países que, como los cuatro analizados, ofrecían importantes déficits de coordinación

El caso de Irlanda resulta altamente representativo del uso competitivo del diálogo social. En 1987, y en un contexto de crisis económica y presupuestaria, el gobierno importó una práctica de gobernanza socioeconómica extraña a la tradición liberal e invitó a los agentes sociales a negociar un acuerdo de moderación salarial. La firma del pacto se tradujo en una recuperación de las exportaciones y de la capacidad de atracción de inversión extranjera. A cambio, el gobierno rebajó el tipo impositivo de las rentas del trabajo, lo que se tradujo en un aumento de los salarios netos. Irlanda incorporaba a su acervo político la coordinación económica a través del pacto social, abriendo una era de corporatismo liberal (Regan, 2012).

El ejemplo anterior permite identificar algunos paralelismos interesantes entre los modelos de diálogo social irlandés y mediterráneo, que inicialmente podrían pasar desapercibidos. Uno de ellos es la reserva del papel protagonista para el gobierno, como principal agente de activación (y desactivación) del diálogo social (Hassel, 2014). El gobierno retiene una posición de privilegio dentro de la red de intercambios con los grupos de representación privados, que resulta funcional para compensar los déficits de coordinación. No obstante, este desequilibrio resulta negativo en otros aspectos, tales como el infradesarrollo del marco institucional de diálogo social, la falta de independencia, el débil mandato o la fragmentación interna de los grupos de intereses privados o el riesgo permanente de intervención interesada del gobierno en aspectos privativos de la negociación colectiva (Hamman y Kelly, 2011).

Debido a este desequilibrio y a pesar de su funcionalidad, la estabilidad del diálogo social nunca ha estado completamente asegurada en estos países. El recurso a la unilateralidad gubernamental, por tanto, ha sido consecuencia esperable del tensionado de los modelos de gobernanza socioeconómica de los cuatro países dentro de la crisis. Ahora bien, la crisis no ha ensanchado la brecha de poder entre actores reforzando a unos (gobiernos) a costa de otros (sindicatos y, secundariamente, empresarios). En realidad, ambos han sido debilitados como consecuencia del estrechamiento de los espacios de toma de decisiones políticas a escala nacional (Culpepper y Regan, 2014; González Begega y Luque, 2015). La condicionalidad de los programas de ayuda financiera europea ha alterado las cuatro precondiciones de activación y mantenimiento del diálogo social referidas en la sección anterior, reconfigurando la relación recíproca entre gobiernos y sindicatos y reduciendo su capacidad para influir efectivamente los unos sobre los otros.

Gobiernos bajo vigilancia: ¿gobiernos debilitados?

Mandato

El control del gobierno sobre las políticas públicas nacionales puede reducirse por tres factores: (1) por la cesión voluntaria de competencias a instituciones de carácter supranacional; (2) por la transferencia, también voluntaria, de competencias a niveles administrativos inferiores; o (3) por la entrega, en este caso obligada, de capacidad de decisión a instituciones supranacionales, a consecuencia de tensiones generalmente asociadas a la internacionalización financiera (Öbert *et al.*, 2011).

La condicionalidad derivada de la recepción de las ayudas financieras europeas, expresadas en forma de Memorandos de Entendimiento o de compra de bonos en el mercado secundario, ha supuesto una pérdida de soberanía para los gobiernos de la periferia de la Eurozona que responde a una combinación de los escenarios 1 y 3. La entrada en la UEM supuso una cesión voluntaria de soberanía a las instituciones de gobierno de la Moneda Única, muy particularmente al Banco Central Europeo (BCE), como organismo encargado de la definición de la política monetaria común. Desde 2008, la parcela de soberanía cedida se ha visto ensanchada, extendiéndose a las políticas fiscales y de gasto, así como a la reforma de los sistemas de bienestar y mercado de trabajo. Independientemente del grado de condicionalidad del soporte financiero, la discrecionalidad política de los gobiernos de la periferia de la Eurozona se ha reducido en el periodo 2008-2014. Los nuevos mecanismos de gobernanza económico-financiera de la Eurozona, Semestre Europeo, Pacto de Estabilidad y Crecimiento y Pacto Euro Plus, inspirados en los principios de ortodoxia fiscal, plantean exigencias para todos los gobiernos, pero muy especialmente para los más dependientes de los programas de ayuda.

En realidad, "el acceso real o potencial a la asistencia financiera (...) a través de la compra de bonos soberanos (...) era la zanahoria. La amenaza de tener que entrar en un programa de asistencia formal explícitamente condicionado (...) era el palo" (Sacchi, 2015: 77), pero ambas opciones han conducido al mismo horizonte de cesión forzada de soberanía.

En España, tras el intento inicial del ejecutivo de afrontar la crisis a través de medidas de estímulo de inspiración keynesiana y de diálogo social, el cambio de escenario se produjo tras la irrupción de las exigencias comunitarias de consolidación fiscal. La condicionalidad política se hizo patente a partir de Mayo de 2010, tras el anuncio por el gobierno de las primeras medidas de ajuste del gasto público sugeridas por el BCE y la Comisión Europea. La aplicación de dichas medidas abre el episodio de fricción entre gobierno y sindicatos del periodo 2010-2014, en el que solo se alcanza un pacto sobre pensiones, en Enero de 2011 (González Begega y Luque Balbona, 2014). La escalada de la crisis de deuda condujo, en Junio de 2012, a una solicitud de rescate bancario atendida a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Pese a que el gobierno español no solicitó el rescate de su deuda soberana, el Memorando de Entendimiento firmado con la Comisión Europea incluyó también exigencias macroeconómicas que minoraron la gobernanza autónoma del gobierno español.

En Italia, antes que de un rescate financiero, en todo caso ha sido indirecto y vehiculado a través de la compra de bonos en mercado secundario por el BCE, debe hablarse de una intervención política. Italia ha estado sometida a presiones de condicionalidad similares a las de España desde que, en otoño de 2011, la escalada de la crisis de deuda soberana forzó la sustitución del gobierno Berlusconi por un gabinete técnico. La formación del gobierno Monti alejó la posibilidad de rescate pero también hizo incompatible el rito de la concertación social con el modelo de toma de decisiones técnicas, caracterizado por la inmediatez y la unilateralidad (Pedersini y Regini, 2013).

La crisis comenzó en Irlanda un año antes que en el resto de la Eurozona, cuando el colapso inmobiliario arrastró al sector bancario y al equilibrio fiscal del Estado. Entre 2008-2010, el déficit público se disparó, a pesar de la aplicación de tres paquetes sucesivos de ajuste fiscal. A finales de 2010, la solicitud de rescate financiero a las instituciones europeas no implicó un viraje en la orientación de las medidas nacionales de contención del gasto público y reducción de los costes laborales unitarios, pero sí significó una transferencia de soberanía y la tutela de la gobernanza socioeconómica irlandesa por la troika formada por Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional. La conjunción de factores financieros y políticos "contribuyó al colapso de la (...) concertación social" (Regan, 2012, 171).

Los casos irlandés y portugués ofrecen paralelismos. En Portugal, sin embargo, el diálogo social se deteriora antes de la solicitud del rescate, en Mayo de 2011. La no aprobación por el Parlamento del cuarto de los programas nacionales de austeridad aplicados en el bienio 2009-2010, denominados Planes de Estabilidad y Crecimiento (PEC), provocó la dimisión del ejecutivo, la entrada de un nuevo gobierno de coalición conservador y la solicitud del rescate financiero. La Troika impuso a Portugal un severo programa de consolidación fiscal, que implicó la intervención directa de los mecanismos de gobernanza socioeconómica por parte de técnicos de la Comisión Europea (Costa, 2012). El rescate dislocó el marco de intercambio político neo-corporatista, al enajenar del espacio nacional el diseño de las medidas de reforma (González Begega y Luque Balbona, 2015).

Unidad

El impacto político de la crisis es detectable en la volatilidad gubernamental de la periferia de la Eurozona. Los cuatro países han cambiado de gobierno (y éste de color político) al menos en una ocasión desde 2008. España y Portugal ofrecen paralelismos, con la sustitución de un gobierno socialdemócrata por otro conservador en 2011. En Irlanda, la debacle electoral del gobierno conservador también en 2011 dio paso a un ejecutivo de coalición democristiano-laborista. El escenario de cambio político en Italia es más complejo.

La tradicional inestabilidad gubernamental italiana ha adquirido nuevos elementos. En Abril de 2008, el gobierno socialdemócrata de Prodi fue sustituido, tras convocatoria electoral anticipada, por un ejecutivo conservador, presidido por Berlusconi. La crisis de la deuda soberana se tradujo en Italia en un rescate

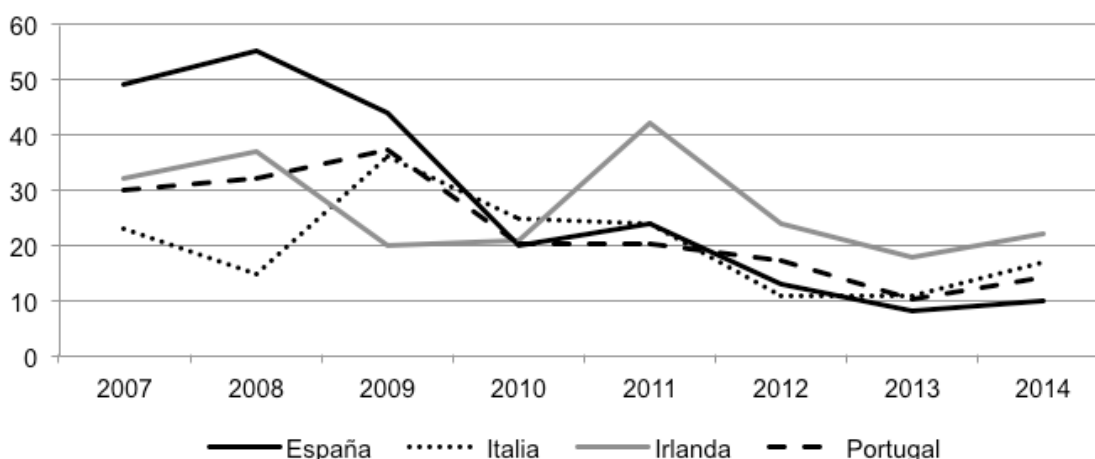
político. En Noviembre de 2011, el presidente de la República, bajo la presión de las instituciones europeas, forzó la sustitución del gabinete Berlusconi por un nuevo equipo técnico. El gobierno Monti permaneció en el poder hasta Abril de 2013, cuando perdió el apoyo parlamentario. Tras las elecciones, el socialdemócrata Letta recabó los apoyos para encabezar un nuevo gobierno de coalición. Sin embargo, en Febrero de 2014, fue forzado a dimitir, siendo sustituido por el también socialdemócrata Renzi.

De todos los gobiernos de la periferia de la Eurozona, solo el español, a partir de 2011, ha dispuesto de una mayoría parlamentaria suficiente como para evitar fórmulas de coalición. Tanto la inestabilidad como la compartimentación interna del gobierno son factores que dificultan el intercambio político, al reducir la confianza de los agentes sociales "en la capacidad de los gobiernos para controlar lo que los grupos de interés quieren a cambio en el intercambio político" (Öbert *et al.*, 2011: 378).

La debilidad, sin embargo, únicamente es un factor de activación del diálogo social, cuando los gobiernos retienen su mandato, conservan cierta disponibilidad de recursos y mantienen, además, una actitud favorable hacia el intercambio neo-corporatista. Esta combinación de condiciones no se cumple en la periferia de la Eurozona. Paradójicamente, los gobiernos de España, Irlanda, Italia y Portugal nunca han sido tan débiles en mandato como en el actual contexto de crisis económica y muy posiblemente nunca han temido tanto la penalización electoral de un programa de reformas que ha sido aplicado unilateralmente (Baccaro y Regan, 2014; Hamman *et al.*, 2014). Pero la condicionalidad de los rescates financieros y el estrechamiento del espacio político nacional han bloqueado la posibilidad de encontrar incentivos para mantener abierto el diálogo social.

Por otro lado, la confianza ciudadana en los gobiernos se ha desplomado desde 2010, precisamente cuando la condicionalidad europea se hace más intensa (ver Gráfico 1). Los electores han percibido que "pueden cambiar sus gobiernos pero difícilmente puede cambiar las políticas que éstos aplican" (Dellepiane y Hardiman, 2013: 26). La crisis ha generado una sensación de democracia sin opciones en la periferia de la Eurozona y ha alimentado la insatisfacción con las instituciones democráticas. La debilidad de los gobiernos ante la opinión pública puede representar un incentivo para la búsqueda de legitimidad extraparlamentaria a través del diálogo social. Sin embargo, los gobiernos de la periferia de la Eurozona no han explorado este camino. Por su parte, los agentes sociales se han mostrado muy reticentes a la hora de compartir los costes políticos de la austeridad (Hamann *et al.*, 2014).

GRÁFICO 1. GRADO DE CONFIANZA CIUDADANA EN EL GOBIERNO NACIONAL (%)

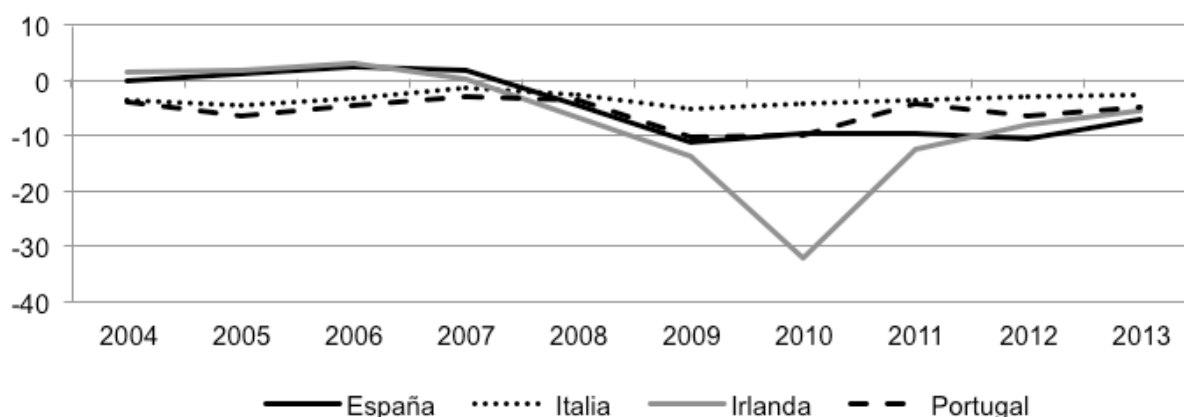


Fuente: Eurobarómetros 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79 y 81. Disponible en <http://ec.europa.eu/publicopinion/indexen.htm>.

Recursos

Los gobiernos deben controlar recursos deseables por los interlocutores sociales para que el intercambio político neo-corporatista sea activado y mantenido en el tiempo. En escenarios de menor disponibilidad de recursos, los agentes sociales pueden sentirse inclinados a explorar otras vías de relación con el gobierno como la contestación. El Gráfico 2 muestra la evolución del déficit público a lo largo de la última década para los países analizados. En los cuatro casos, los recursos disponibles por los gobiernos para activar el diálogo social, ofreciendo políticas favorables a cambio de la colaboración de los agentes sociales en el diseño de la agenda socioeconómica, se han visto deteriorados.

GRÁFICO 2. BALANCE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (% DE PIB)



Fuente: Eurostat.

Antes de 2008, España se encontraba en una posición fiscal holgada. A partir de 2008, el colapso de los ingresos públicos y el incremento del gasto provocaron el desequilibrio de las finanzas públicas. A finales de 2014, el déficit aún no ha alcanzado los objetivos de contención establecidos por la condicionalidad europea. El priorizado de los objetivos de consolidación fiscal, explicitado antes incluso de la firma del Memorando de Entendimiento a través de una enmienda constitucional, ha reducido el espacio para el intercambio político neo-corporatista.

En Italia los problemas de déficit público se vieron agravados por la inestabilidad política hasta la sustitución del gobierno Berlusconi en Noviembre de 2011. El ejecutivo Monti antepuso el control del gasto a cualquier otro objetivo, lo cual alejó la posibilidad de reactivar el intercambio político con los agentes sociales en un contexto de calma gubernamental. Dentro de un escenario de condicionalidad implícita, la compra de bonos en el mercado secundario por parte del BCE alivió la tensión sobre la deuda soberana italiana.

El caso de Irlanda es similar al español, con una posición fiscal inicial consolidada. Sin embargo, la conjunción de la crisis inmobiliaria y bancaria doméstica y la restricción del crédito internacional desequilibró las finanzas públicas antes incluso de que el gobierno irlandés decidiera ayudar al sector bancario y solicitar el rescate europeo para su deuda soberana. Como en el resto de países formalmente intervenidos y en la medida en que la prioridad del gobierno fue asegurar el acceso a la financiación, el intercambio político nacional con los agentes sociales fue sustituido por una nueva forma de intercambio supra-nacional y subordinado con la Troika.

La crisis incrementó los endémicos problemas de desequilibrio de las finanzas portuguesas, atajados en el pasado a través de incrementos en la presión fiscal. El intento de atacar la consolidación fiscal racionalizando el gasto supone una novedad de la gobernanza socioeconómica en Portugal (Campos y Martín Artiles, 2011). Como en Irlanda, la condicionalidad del rescate ha devaluado los recursos disponibles

por el gobierno para activar y, sobre todo, sostener, el intercambio político.

Actitud

En el modelo clásico de neo-corporatismo industrial-fordista, el intercambio político es una forma de encauzado del conflicto industrial, a partir de las conexiones entre partidos socialdemócratas y sindicatos (Pizzorno, 1978). El diálogo social constituye así una fórmula de gobernanza socioeconómica "de izquierdas", con resultados positivos para la ampliación de la legitimación social de las políticas públicas, la reducción de la conflictividad laboral o el control de los salarios (Korpi, 1983).

Aunque todavía cabe esperar una actitud más favorable hacia el diálogo social por los gobiernos socialdemócratas, el argumento anterior ha sido profundamente revisado. Por un lado, los lazos orgánicos entre partidos socialdemócratas y sindicatos se han debilitado en las tres últimas décadas. Por otro, existen múltiples experiencias de pactos sociales exitosos alcanzados entre gobiernos conservadores y sindicatos dentro del nuevo modelo de neo-corporatismo competitivo del Euro. La crisis de la periferia de la Eurozona ha hecho aún menos relevante el color político del gobierno como factor explicativo del diálogo social. La Figura 2 recoge la orientación de los gobiernos de los cuatro países analizados desde 2005.

FIGURA 2. ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| España | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda |
| Italia | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda |
| Irlanda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda |
| Portugal | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda | Centro-izquierda |

Nota: centro-izquierda (gris claro); centro-derecha (gris oscuro); técnico (blanco); concentración (negro).

Fuente: elaboración propia.

España y Portugal muestran una evolución gubernamental similar. Tras dos legislaturas de gobierno socialdemócrata, las elecciones de 2011 facilitaron un cambio de color político de los ejecutivos, con respaldo de mayoría absoluta en España y de coalición en Portugal.

En España, el gobierno Zapatero mantuvo una actitud favorable hacia el diálogo social, a pesar del incremento de la tensión tras Mayo de 2010. El intercambio político con sindicatos y empresarios ganó en intensidad al inicio de la crisis, en combinación con las políticas de gasto expansivas. El viraje hacia la austeridad y la llegada al gobierno del ejecutivo Rajoy, en Noviembre de 2011, provocaron la discontinuación del diálogo social, a pesar de que ninguno de los actores denunció su utilidad como instrumento de gobernanza socioeconómica. En otoño de 2014, y en un contexto de retorno al crecimiento económico y relajamiento de las condiciones de austeridad, el diálogo social se ha reactivado (González Begega y Luque Balbona, 2015).

La inestabilidad gubernamental italiana ha afectado al intercambio neo-corporatista. Los gobiernos han oscilado entre una actitud favorable al diálogo social, al comienzo de la crisis, y un progresivo alejamiento del mismo, independientemente del color político. El último acuerdo tripartito sobre pensiones, mercado de trabajo y competitividad, de hecho, fue firmado en Julio de 2007, antes de la crisis. Desde entonces, "los pactos sociales han sido más difíciles de alcanzar tanto bajo los gobiernos de Berlusconi [y] de Monti" (Pedersini y Regini, 2013: 5), como después. Tras la denuncia pública del diálogo social por parte del tecnócrata Monti, la llegada de los ejecutivos de Letta y Renzi no ha significado la reapertura del intercambio político. Antes bien, los dos gobiernos socialdemócratas se han reafirmado en la posición de Monti, lo cual abre la posibilidad de un abandono estructural del intercambio neo-corporatista en Italia como consecuencia de la renuncia al mismo por el gobierno (Culpepper y Regan, 2014).

En Irlanda, tras la sustitución del gobierno conservador de Fianna Fáil por el ejecutivo de concentración del también conservador Fine Gael y el socialdemócrata Partido Laborista, el intercambio político neo-corporatista se ha fracturado. Después de dos décadas de concertación social, la crisis ha devuelto al modelo de gobernanza socioeconómica irlandés a la vieja tradición liberal de no reconocimiento de los agentes sociales en la toma de decisiones públicas. Esto desnuda el compromiso únicamente instrumental de los gobiernos irlandeses con el diálogo social a lo largo del periodo 1987-2009. Como señala Regan (2012: 3), el neo-corporatismo irlandés habría sido únicamente "una estrategia en busca del objetivo de competitividad nacional y no [la expresión de] un compromiso político".

En Portugal, el gobierno ha procurado incorporar a los agentes sociales al diseño, primero, y a la pedagogía, después, de los programas de reforma. A pesar de la estricta condicionalidad política, la Comisión Permanente de Concertación Social ha sido consultada sistemáticamente por el gobierno en relación a las medidas de ajuste. Ahora bien, el sindicato mayoritario portugués, CGTP, ha indicado que esta consulta se ha establecido en términos únicamente formales, dado que "aunque el diálogo social ha tenido lugar, las soluciones ya estaban acordadas entre el gobierno y la Troika y no estaban abiertas a discusión" (Palma Ramalho, 2013: 18).

Sindicatos excluidos: ¿Sindicatos debilitados?

Mandato

El mandato de los sindicatos, expresado en su grado de centralización o capacidad de ejercer efectivamente la representación de los intereses de sus afiliados, constituye una precondition para la activación del intercambio político neo-corporatista. La centralización de las organizaciones sindicales en la periferia de la Eurozona es intermedia, aunque con algunas diferencias significativas entre países. Mientras que en España (0,5), Italia (0,5) o Portugal (0,4), este indicador sintético no ha experimentado variaciones en los últimos años, en Irlanda ha descendido del 0,4 al 0,3 a partir de 2009 (ver Visser, 2013).⁵ El distinto modelo de afiliación sindical confederal irlandés puede explicar por qué la ICTU tiene más dificultades que el resto de confederaciones sindicales de los otros tres países para centralizar los intereses de sus miembros (McDonough y Dundon, 2010).

Por otro lado, la estructura de la negociación colectiva también incide sobre el grado de mandato de los sindicatos. Los procesos de descentralización de la negociación colectiva han erosionado la fortaleza institucional de los sindicatos en los tres países mediterráneos, incrementando los riesgos de descoordinación interna y de pérdida de control confederal sobre las estructuras sindicales de empresa.

Unidad

La fragmentación sindical supone, a priori, un elemento negativo para la activación del intercambio político. A mayor número de organizaciones y de opciones estratégicas, menor es, en principio, la fiabilidad de los sindicatos como interlocutores políticos. La división sindical según opciones ideológicas es una característica de la práctica totalidad de modelos nacionales de relaciones laborales mediterráneos. Este no es el caso de Irlanda, donde una sola confederación, la ICTU, aglutina la representación del trabajo en los procesos de diálogo social. No obstante, los problemas de unidad se han resuelto de manera diferente en cada país. Frente a Italia o Portugal, en España no existen problemas de unidad y, por tanto, de fiabilidad en el intercambio político por parte de las organizaciones sindicales.

⁵ El indicador de centralización sindical elaborado por Jelle Visser (2013) mide el grado de cohesión inter- e intra-organizacional de los sindicatos a través de una escala que abarca de 0 y 1 (máximo y mínimo grado de centralización, respectivamente). Más detalles en ICTWSS Database, 1960-2012, version 4.0.

En España, las dos confederaciones sindicales reconocidas como interlocutoras sociales, CCOO y UGT, mantienen una estrategia de unidad de acción sindical en el plano político desde finales de la década de los ochenta. Esta solución estratégica ha permitido solventar los problemas de división organizativa, que no han afectado a la fiabilidad del sindicalismo español.

En Italia, los problemas de unidad han sido mayores. Las tres principales confederaciones sindicales no han sido capaces de articular un marco estable de colaboración desde los grandes pactos sociales de entrada en el Euro de los noventa. El mayoritario CGIL ha mantenido una estrategia de mayor conflictividad que los más moderados CSIL y UIL, negándose a participar en los dos pactos sociales (2002 y 2009) firmados por estos (Simoni, 2010). La crisis no ha contribuido a cohesionar las estrategias sindicales, más que puntualmente, a pesar de la reciente convocatoria conjunta de huelga general en diciembre de 2014 contra la iniciativa de reforma laboral del gobierno Renzi.

La unidad sindical en Portugal no existe como experiencia estratégica estable. Las dos principales confederaciones, CGTP y UGT-P, aún con fuertes lazos con los partidos políticos, se mueven entre la beligerancia de la primera, mayoritaria, y la predisposición al pacto de la segunda (Gonzalez Begega y Luque Balbona, 2015). En términos generales, la crisis ha reforzado la fragmentación estratégica del sindicalismo portugués. UGT-P ha tomado parte en los procesos de diálogo social abiertos por el gobierno, incluido el que sustentó la reforma del Código de Trabajo de 2012, mientras que la mayor parte de las huelgas generales del periodo han sido convocadas por CGTP en solitario (Monteiro Fernandes, 2013).

Por último, en Irlanda no existen problemas de unidad organizativa de los sindicatos, dado que la ICTU ostenta el monopolio de representación en los procesos de diálogo social. Ahora bien, la concentración de la afiliación en el sector público y las dificultades de penetración sindical en el nuevo sector servicios han transformado a la ICTU en un vehículo de intereses (casi) específico de la función pública, abriendo una brecha de representatividad con respecto al resto de trabajadores (Regan, 2012).

Recursos

El principal recurso de los sindicatos en el intercambio político es la movilización de apoyo de sus afiliados. Los gobiernos pueden intentar conseguir este activo para apuntalar extra-parlamentariamente sus políticas. Los sindicatos juegan, por tanto, con su capacidad para generar consenso o, alternativamente, bloqueo social. No obstante, la efectividad del poder de veto sindical ha decrecido de forma significativa en las dos últimas décadas, tanto en sus reclamaciones de cara al mercado de trabajo como a la reforma del Estado del Bienestar (Natali y Rhodes, 2004). En el contexto de la crisis y a pesar de la utilización sistemática de la movilización en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos de la periferia de la Eurozona no han tenido éxito ni para obligar a los gobiernos a abandonar el sendero de la unilateralidad ni para forzar un cambio de políticas (Köhler *et al.*, 2013; Culpepper y Regan, 2014).

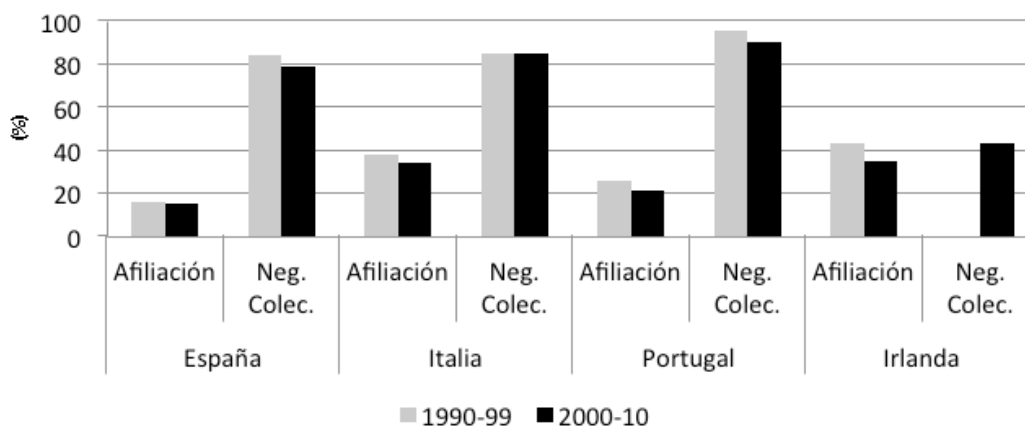
La capacidad de movilización de los sindicatos descansa, obviamente, en su afiliación, pero no de forma exclusiva. El grado de representatividad sindical también depende de su institucionalización en la negociación colectiva y de la capacidad de recabar soporte laboral más allá de sus afiliados, actuando como mediadores de los intereses generales de la ciudadanía.

En los países mediterráneos, la existencia de cláusulas de extensión automática de la negociación colectiva ha asegurado a los sindicatos un alto nivel de representatividad, independientemente de su baja afiliación. La reducción de las tasas de cobertura de la negociación colectiva asociadas a las reformas laborales puestas en marcha en España y Portugal en 2012 constituye, por tanto, una amenaza a la posición institucional de los sindicatos y a su capacidad de representación del interés laboral.

En el caso irlandés, la inexistencia de este tipo de solución institucional, las dificultades de sindicalización fuera del sector público y la caída generalizada de la tasa de afiliación desde mediados

de la década de los noventa han provocado que, tal como reconocía el secretario general de la ICTU, la concertación social irlandesa haya "estado construida sobre la arena" (Begg, 2008: 55). El gráfico 3 recoge la evolución de la tasa de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva en los cuatro países para los periodos 1990-1999 y 2000-2010.

GRÁFICO 3. TASAS DE AFILIACIÓN Y DE COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

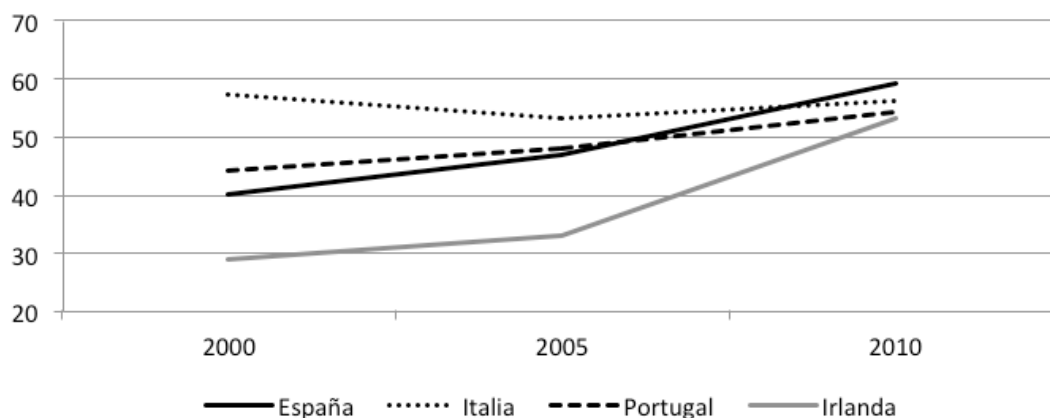


Fuente: ICTWSS database, versión 4.0.

La movilización de apoyo es la tercera de las fuentes de representatividad sindical. Los sindicatos de la periferia de la Eurozona han recurrido sistemáticamente a la huelga general para extender la acción reivindicativa más allá de su perímetro de afiliados. Sin embargo, la capacidad de veto sindical sobre la agenda de reformas ha sido muy reducida, si no inexistente.

Los sindicatos han tenido además dificultades para liderar la protesta y su monopolio de representatividad del conflicto social se ha visto amenazado por las organizaciones emergentes de la sociedad civil, transformadas o no en nuevas fuerzas políticas: 15-M y Podemos, San Precario y *Cinque Stelle*, *We're 99 %* o *Geração à Rasca* y *Que se Lixe a Troika* (Baumgarten, 2013; Köhler et al., 2013).

El Gráfico 4 recoge la evolución de la desconfianza pública hacia los sindicatos, identificados como corresponsables del diseño en las reformas restrictivas del mercado de trabajo y del Estado del Bienestar de las dos última décadas, precisamente por su incorporación al entramado neo-corporatista. En 2010, más del 50 % de los encuestados expresaba su desconfianza en los sindicatos en los cuatro países, siendo particularmente intensa la pérdida de crédito ciudadano en Irlanda.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE DESCONFIANZA CIUDADANA HACIA LOS SINDICATOS (%)

Fuente: Eurobarómetro. Disponibles en: <http://ec.europa.eu/publicopinion/indexen.htm>.

La pérdida de confianza ciudadana implica, además de la pérdida de capacidad de veto, la creciente dificultad de los sindicatos para movilizar un recurso valioso de legitimación extra-parlamentaria de la acción política. En este escenario, los gobiernos se desinteresan por unos sindicatos desprovistos de activos que intercambiar. En Italia o en Irlanda, donde el proceso de descomposición del intercambio político neo-corporatista es más acelerado, los sindicatos corren el riesgo de quedar reducidos a un grupo de presión más, sin reconocimiento institucional privilegiado y reducidos en su influencia a la representación exclusiva de sus afiliados (Culpepper y Regan, 2014).

Actitud

A partir de 2008, los sindicatos de los cuatro países analizados han mantenido una relación mixta de "baile y boxeo" con los gobiernos, combinando la aceptación a participar en los cada vez más irregulares procesos de intercambio político activados por los ejecutivos con la contestación (Huzzard *et al.* 2004). Cada país y organización sindical, no obstante, ofrece un equilibrio distinto entre ambas opciones estratégicas.

Los sindicatos han hecho uso de la huelga general para tratar de forzar la activación del diálogo social. La protesta, de hecho, ha sido percibida como un instrumento de retorno (y no de ruptura o denuncia) del modelo de concertación política, sobre el que las organizaciones sindicales vienen depositando sus esperanzas de revitalización desde los noventa (Hamann y Kelly, 2004).

Los sindicatos no han perdido el interés en el diálogo social, más bien al contrario pues quienes lo han postergado, congelado o abandonado como mecanismo de gobernanza socioeconómica han sido los gobiernos (Molina y Miguélez, 2013). La utilización del conflicto para pedir la reactivación de los pactos sociales muestra "la dependencia institucional de estas organizaciones con respecto al diálogo social y sus dificultades para diseñar una estrategia al margen de éste" (González Begega y Luque Balbona, 2015).

DISCUSIÓN: CICLO O RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL

La crisis de deuda soberana de la periferia de la Eurozona ha sometido a una intensa presión a las estructuras de intercambio político neo-corporatista sobre las cuales países como España, Italia, Irlanda o Portugal han elaborado sus políticas públicas de rentas, mercado de trabajo y bienestar en las últimas décadas. La condicionalidad de la ayuda financiera europea ha estrechado el espacio nacional de toma de decisiones, reduciendo la funcionalidad del diálogo social. Frente a crisis o escenarios de reto político-económico previos, el diálogo social ha perdido centralidad como mecanismo de coordinación socioeconómica, desactivándose.

La vigilancia de la toma de decisiones nacionales por las instituciones supra-nacionales representadas en la Troika ha provocado la sustitución del pacto social nacional por el imperativo europeo como elemento legitimador de la política pública. Europa, en vez del diálogo social, ha pasado a justificar la agenda de reforma de los gobiernos. La credibilidad ante los mercados y la necesidad de asegurar el flujo de financiación han sustituido a la legitimidad política social y ciudadana.

El debilitamiento de los actores nacionales del intercambio neo-corporatista es patente en los distintos ejes analizados: mandato, unidad, recursos y actitud. La relación entre gobiernos y sindicatos se ha visto alterada. La pérdida de mandato de los gobiernos es el principal elemento explicativo de la discontinuación del diálogo social, que resulta fundamentalmente de una opción estratégica tomada por este actor.

Independientemente del grado de condicionalidad y de explicitación de la misma, el modelo de intercambio político neo-corporatista entre actores nacionales se ha visto desplazado por un nuevo eje de contraprestaciones, que vincula a los gobiernos nacionales con las instituciones comunitarias y que excluye a los sindicatos. Las organizaciones sindicales son actores periféricos y, en todo caso, subordinados, dentro de este nuevo intercambio. Debido a sus propias debilidades, los sindicatos no han podido influir efectivamente en los gobiernos para reactivar el diálogo social. Sus problemas de representatividad y su incapacidad para hacer efectiva la amenaza de veto político a través de la protesta, se lo han impedido.

La crisis de deuda soberana ha incrementado la heterogeneidad del modelo de gobernanza socioeconómica de la periferia de la Eurozona. Así, aunque el desplazamiento del intercambio político al plano transnacional sea un rasgo común a los cuatro países analizados, el abandono del diálogo social solo se ha producido en dos de ellos, Italia e Irlanda.

En los otros dos, España y Portugal, los pactos sociales no han sido denunciados y, de hecho, una vez retomado el crecimiento económico, relajadas las condiciones de austeridad y recuperado cierto mandato y disponibilidad de recursos por los gobiernos, han reemergido a partir de 2014 como espacios subsidiarios de legitimidad. La crisis, en estos dos países, se relaciona fundamentalmente con los ciclos de activación y desactivación del diálogo social. El intercambio neo-corporatista se ha adaptado a la nueva condición de debilidad de sus actores.

Los casos italiano e irlandés son más complejos. La discontinuación del diálogo social no parece responder a una adaptación coyuntural al marco de gobernanza impuesto por la ayuda financiera europea. Los gobiernos de ambos países han cruzado el Rubicón de la denuncia pública del pacto social como instrumento de elaboración de políticas públicas ineficiente. Al perder su reconocimiento institucional como actores del diálogo social, los sindicatos han quedado reducidos a grupos de presión comunes. Sus debilidades internas en afiliación y apoyo social han lastrado su capacidad para tratar de retener su posición institucional.

El diálogo social ha demostrado históricamente una gran capacidad de reconfiguración y de resistencia. En la medida en que no fragüen nuevos mecanismos alternativos de coordinación socioeconómica no es descartable la reemergencia de la dinámica neo-corporatista. Sin embargo, esta decisión corresponderá al gobierno y no al resto de actores. En cualquier caso, y por el momento, la crisis de deuda soberana ha consolidado tanto en Italia como en Irlanda un nuevo paradigma de unilateralidad en la acción gubernamental.

Bibliografía

Avdagic, Sabina (2010): "When Are Concerted Reforms Feasible? Explaining the Emergence of Social Pacts in Western Europe", *Comparative Political Studies*, 43, pp. 628-57.

Baccaro, Lucio y Regan, Aidan (2014): "Explaining Social Pacts: Weak Government or Strong Executive? Rethinking the Irish and Italian Case in the Aftermath of the Crisis" *Council for European Studies Conference*. Washington, March 14-16, 2014.

Baumgarten, Britta (2013): "Geração à Rasca and beyond: Mobilizations in Portugal after 12 March 2011", *Current Sociology*, 61(4), pp. 457-473.

Begg, David (2008): "The Mission of Unions is Timeless" en Tim Hastings (ed), *The State of the Unions: Challenges Facing Organised Labour in Ireland*, Dublin: Liffey Press.

Campos Lima, Maria da Paz y Martín Artiles, Antonio (2011): "Crisis and Trade Union challenges in Portugal and Spain: between general strikes and social pacts." *Transfer: European Review of Labour and Research* 17 (3): 387-402.

Costa, Hermes Augusto (2012): "From Europe as a model to Europe as austerity: the impact of the crisis on Portuguese trade unions", *Transfer: European Review of Labour and Research*, 18(4), pp. 397-410.

Culpepper, Pepper D. y Regan, Aidan (2014): "Why don't governments need trade unions anymore? The death of social pacts in Ireland and Italy", *Socio-Economic Review* Advance Access published February 2, 2014. doi:10.1093/ser/mwt028.

Dellepiane, Sebastian y Hardiman, Niamh (2013): "The politics of fiscal effort in Spain and Ireland: Market credibility versus political legitimacy" UCD Geary Institute Discussion Paper Series; Geary WP2013/21. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10197/5117>

Esping-Andersen, Gösta (1993): *Los tres mundos del Estado del Bienestar*, Valencia: Alfons El Magnanim.

Ferrera, Maurizio (1996): "The 'Southern Model' of welfare in Social Europe", *Journal of European Social Policy*, 6 (1), pp. 17-37.

González Begega, Sergio y Luque Balbona, David (2015): "Crisis económica y deterioro de los pactos sociales en el sur de Europa: Los casos de España y Portugal", *Revista Internacional de Sociología*, 73 (2) DOI: <http://dx.doi.org/10.3989/ris.2014.03.17>

González Begega, Sergio y Luque Balbona, David (2014): "¿Adiós al corporatismo competitivo en España?: Pactos sociales y conflicto en la crisis económica", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 148, pp. 79-102.

Hall, Peter A. y Soskice, David (2001): *Varieties of Capitalism. The institutional foundations of comparative advantage*, Oxford: Oxford University Press.

Hamann, Kerstin y Kelly, John (2011): *Parties, elections, and policy reforms in Western Europe: voting for social pact*. New York: Routledge.

Hamann, Kerstin y Kelly, John (2004): "Unions as Political Actor: a Recipe for Revitalization?" en Carola M. Frege y John Kelly (ed.) *Varieties of Unionism*. Oxford: Oxford University Press, pp. 93-116.

Hamann, Kerstin; Johnston, Alison; Katsanidou, Alexia; Kelly, John y Pollock, Philip H (2014): "Sharing the Rewards, Dividing the Costs? The Electoral Consequences of Social Pacts and Legislative Reform in Western Europe". *West European Politics*. Published online: 04 Jun 2014. <http://dx.doi.org/10.1080/01402382.2014.911481>.

Hassel, Anke (2003): "The politics of social pacts", *British Journal of Industrial Relations*, 41 (4), pp. 707-26.

Hassel, Anke (2014): Adjustments in the Eurozone. Varieties of Capitalism in Southern Europe. *LEQS Paper* No. 76/2014.

Huzzard, Tony; Gregory, Denis y Scott, Regan (2004): *Strategic Unionism and Partnership: Boxing or Dancing?* Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Köhler, Holm-Detlev; González Begega, Sergio y Luque Balbona, David (2013): "Sindicatos, crisis económica y repertorios de protesta en el Sur de Europa" en Salvador Aguilar (coord.), *Anuario del Conflicto Social 2012*, Barcelona: Universidad de Barcelona, pp. 1013-52.

Korpi, Walter (1983): *The democratic class struggle*. London: Routledge.

Lehmbruch, Gerhard (1977): "Liberal corporatism and Party Government", *Comparative Political Studies*, 10 (1), pp. 91-126.

McDonough, Terrence y Dundon, Tony (2010): "Thatcherism Delayed? The Irish crisis and the paradox of social partnership", *Industrial Relations Journal*, 41 (6), pp. 544-562.

Molina, Oscar y Miguélez, Faustino. (2013): "From negotiation to imposition: social dialogue in austerity times". *ILO Working Paper No. 51*. Geneva: International Labour Office. Disponible en: <http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS223700/lang--en/index.htm>

Molina, Oscar y Rhodes, Martin (2002): "Corporatism: the Past, Present, and Future of a Concept", *Annual Review of Political Science*, 5, pp. 305-331.

Monteiro Fernandes, Antonio (2013): "El impacto de la crisis en la situación laboral portuguesa" *Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, 33.

Natali, David y Rhodes, Martin (2004): "Trade-offs and veto players: reforming pensions in France and Italy", *French Politics*, 2, pp. 1-23.

Öberg, PerOla; Svensson, Torsten; Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjorn Sonne; Rommetvedt, Hilmar y Thesen, Gunnar (2011): "Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia", *Government and Opposition*, 46, 3, pp. 365-391

Palma Ramalho, Maria do Rosário (2013): "Portuguese labour law and industrial relations during the crisis". *ILO Working Paper No. 54*. Geneva: International Labour Office. Disponible en http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_232798/lang--en/index.htm

Pedersini, Roberto y Regini, Marino (2013): "Coping with the crisis in Italy: Employment relations and social dialogue amidst the recession" *ILO Working Paper No. 50*. Geneva: International Labour Office. Disponible en http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_223695/lang--en/index.htm

Petmesidou, Maria y Guillén, Ana M. (2014): 'Can the Welfare State as we know it survive? A view from the crisis-ridden South European Periphery', *South European Society and Politics*, 19 (3), pp. 295-307.

Pierson, Paul (2011): *Welfare state reform over the (very) long-run*, Centre for Social Policy Working Papers, Bremen, University of Bremen.

Pizzorno, Alessandro (1978): "Political Exchange and Collective Identity in Industrial Relations" en Colin Crouch y Alessandro Pizzorno (eds.) *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe Since 1968*, Vol. 2, London: Macmillan.

Rehfeldt, Udo (2000): *Globalización, Neocorporatismo y Pactos Sociales*, Buenos Aires: Lumen.

Regan, Aidan (2012): *The Rise and Fall of Irish Social Partnership*. Tesis doctoral University College Dublin. On line. Disponible en: www.aidanregan.com/1/146/resources/publication_1592_1.pdf

Regini, Marino (2003): "Tripartite concertation and varieties of capitalism", *European Journal of Industrial Relations*, 9(3), pp. 251-263.

Rhodes, Martin (1998): "Globalization, Labor Markets and Welfare States: a Future of 'Competitive Corporatism?'" en Martin Rhodes e Yves Meny (eds.) *The Future of European Welfare: a New Social Contract*, London: Palgrave MacMillan.

Sacchi, Stefano (2015): "Conditionality by other means: EU involvement in Italy's structural reforms in the sovereign debt crisis" *Comparative European Politics*, 13, pp. 77-92.

Schmitter, Philippe C. (1974): "Still the Century of Corporatism", *Review of Politics*, 36(1), pp. 85-131.

Simoni, Marco (2010): "Labour and Welfare Reforms: The Short Life of Labour Unity" en Andrea Mammone y Giuseppe A. Veltri (eds) *Italy Today. The Sick Man of Europe*, London: Routledge.

Visser, Jelle (2013): *Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts, 1960-2011*, versión 4.0. On line. Disponible en: <http://uva-aias.net/38>